



10-N

El veto vengativo o la antipolítica

do un gobierno “de técnicos” –con la evidente autoexclusión de Sánchez y de Casado y de sus más afines– nuestros políticos tienen la obligación moral de procurar un ejecutivo que afronte la crisis política, territorial, institucional y también económica en la que estamos inmersos. Y que nadie entienda que hablo de preferir la política ante la tecnocracia. Eso sería un error insalvable.

Hablo de hacer política “de Estado”. Éste es el momento, aunque la vertebración del cómo estructurarlo sea compleja.

Frente al guerracivilismo prefiero el pacto y la concordia. ¿Ése fue nuestro acierto en 1978 que algunos hoy quieren profanar! En momentos excepcionales para la convivencia se requiere la participación de todos para salvar el bien común.

Sea este mi llamamiento a todos nuestros políticos que verdaderamente aman España para que, desde el gobierno o la oposición, no aprovechen esta situación crítica en su rácano provecho. Antes bien recuerden que sin la procura del interés general, sus momentáneas victorias se convertirán en la derrota de todos.

Catedrático de Derecho constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos y editor de www.constitucionparatodos.com

prestigiar nacional e internacionalmente el juicio al *procés*. Pero es que el 10-N, como en las elecciones andaluzas, la unidad de España ha sido una de las motivaciones más dominantes del voto. Vox ha vendido patria, y a diferencia del 28-A, el miedo a una patria dañada por el independentismo ha podido más que el miedo a la extrema derecha al que Sánchez apeló. Hay algo más que explica el triunfo de Vox. Ha vendido, también, rechazo al despilfarro autonómico, algo muy relevante ante una posible crisis económica, otra de las motivaciones que ha reinado en las urnas del 10-N. “El Estado de las autonomías nos ha hecho todavía más desiguales”, afirmó sin despeinarse Abascal en el debate, dando con ello en la llaga de lo que muchos piensan pero no se atreven a decir. Los de Abascal han utilizado la estrategia de arremeter contra lo políticamente correcto, algo a lo que hay que prestar atención si se quiere entender la deriva que puede adquirir esta fuerza política en el futuro.

España insiste en su fragmentación, y con ello proporciona a Sánchez la grave dificultad de articular mayorías, a Casado la de consolidar liderazgo y partido, y a España, la de su gobernabilidad.

Catedrática de Comunicación Política y del Sector Público. Universidad Complutense de Madrid



Francisco Sosa Wagner

Cuando me siento a escribir estas líneas salta la noticia, procedente de los periódicos austriacos, según la cual Sebastian Kurz, presidente del Partido popular de Austria y ganador de las elecciones de septiembre, ha anunciado la apertura de negociaciones con los verdes para la formación de una coalición de Gobierno. Hace unos días se ha conocido, asimismo, que la CDU alemana estaría dispuesta a formalizar posibles pactos con Die Linke (los antiguos comunistas). Ítem más: en el Land de Turingia, donde se acaban de celebrar elecciones, los liberales han acordado, después de titubeos y rechazos, sentarse a negociar con esa misma Linke.

Éste es el comportamiento en países donde se sabe que los vetos, eternos, correosos, vengativos y primitivos, que se practican entre los partidos son un arma de destrucción que, si se usa además con obcecación, convierte el escenario en el que la política se desempeña en un yermo. El veto, el “no es no” empleado por Sánchez e imitado después por otros, es lo contrario de la política, que exige aunar las voces discrepantes para que puedan oírse al final las notas afinadas de un acuerdo que sea útil para resolver problemas a los ciudadanos. Porque los pactos y los acuerdos son a la vida política lo que los peces al mar o los cuadros a un museo: su ingrediente inexcusable. Claro es que tales pactos han de ser pactos serios trabados por personas que sepan de qué hablan, no por simples aficionados o, peor aún, por inficionados por el virus de la palabrería vacua y las boberías electoreras.

Esta actitud lastimosa, atávica, es la que conforma nuestro paisaje. Lo hemos padecido desde abril hasta estas elecciones del domingo y parece que va a conformar el panorama a partir de ahora, una vez conocidos los resultados electorales. Al menos eso deduzco de las primeras declaraciones de los responsables.

Lo lógico sería que el presidente del Gobierno en funciones, en su calidad de ganador de las elecciones, llamara al partido de su preferencia para presentarle un programa que contuviera aquello que se propone hacer. Hablo de un programa detallado, no de vacuidades como la del Gobierno “progresista” o “inclusivo” o “feminista”, etc. ¿Lo va a hacer el actual titular de tan alta responsabilidad? Me encantaría equivocarme, pero lo dudo habida cuenta de su actitud pasada.

Ahora bien, si esto no es así, es obligación de las fuerzas políticas



Los líderes de los principales partidos, durante el debate electoral televisado del pasado 4 de noviembre.

Los pactos son a la vida política lo que los peces al mar: su ingrediente inexcusable

que disponen de una representación parlamentaria relevante enviarle sus concretas propuestas. Estoy pensando sobre todo en el Partido Popular, que tiene amplia experiencia en la España democrática y podría ofrecerle un pacto que permitiera formar una coalición por primera vez en nuestro sistema. A él podrían añadirse otras fuerzas.

Ciertamente, no sé qué tiene que pasar para que en un país amenazado por la rebelión catalana en su misma existencia secular o, por las turbulencias económicas, en asuntos sustanciales de la vida diaria, no se trate de ensayar una fórmula de colaboración como la que estoy proponiendo.

Evidentemente, las razones alegadas por los protagonistas para no hacerlo son variadas, entre ellas cobran especial magnitud las pretendidas distancias entre la “derecha” y la “izquierda”, un embeleco que

nadie puede creerse porque cuando quieren unirse para nombrar magistrados en el Tribunal Constitucional o en el Consejo del Poder Judicial siempre encuentran la forma de entenderse en la ocasión propicia.

O sea, que ese cuento no vale. Preciso es añadir que el Congreso se ha fragmentado en términos territoriales (País Vasco, Cataluña, Canarias, Cantabria, Teruel...), un factor adicional de complicación. Por cierto, esta realidad del Congreso espero que sirva para no oír más la salmodia de convertir al Senado en una Cámara territorial. A menos que se pida al mismo tiempo una revisión del sistema electoral para llegar al Congreso.

¿Se impondrá el buen sentido? Lo dudo, porque pienso que las mismas personas que nos han traído hasta esta situación paralizante no nos van sacar de ella.

Acaso no sea impertinente en este momento recordar que, según el artículo 56.1 de la Constitución, “el Rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones” y que “moderar” es –según la RAE– “templar, ajustar o arreglar algo evi-

Las mismas personas que nos han traído hasta esta situación no nos van a sacar de ella

tando el exceso”. Sobre todo si caemos en la cuenta de que exceso es convocar elección tras elección y exceso es no poder renovar órganos constitucionales básicos ni tomar medidas para el bienestar de los españoles. Sé bien que el asunto es delicado, pero sería cuestión de buscar alguna fórmula para que el Rey pudiera cumplir su olvidada función constitucional y, si alguien agita el espantajo histórico del “borboneo”, le recordaré que, bajo tal expresión, se escondía la práctica execrable de don Alfonso XIII de elegir, para presidir un Gobierno, entre los líderes de las diferentes facciones de los partidos (los Romanones, los García Prieto etc.). Podemos estar tranquilos porque don Felipe, hombre prudente y documentado, sabe que lo único que debe evitar en su reinado es imitar a su bisabuelo.

Catedrático universitario